

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500320150084402
Proceso:	Ordinario
Demandante:	LUISA DEL SOCORRO MARQUEZ RACINI
Demandado:	COLPENSIONES, PORVENIR S.A, PROTECCION
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	10/03/2023
Decisión:	REVOCA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 16/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	LUISA DEL SOCORRO MÁRQUEZ RACINI
DEMANDADA	COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A y PORVENIR S.A.
LITISCONSORTE NECESARIO POR PASIVA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO- OFICINA DE BONOS PENSIONALES ¹
ORIGEN	Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05-001-31-05-003-2015-00844-02
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional de pensionada en el RAIS e indemnización de perjuicios
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por LUISA DEL SOCORRO MÁRQUEZ RACINI contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A-, PORVENIR S.A. y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO -litis consorte necesario por pasiva-.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda²

La señora Luisa del Socorro Márquez Racini formula demanda contra Colpensiones, Protección S.A. y Porvenir S.A, pretendiendo se declare **i)** la nulidad, ineficacia o inexistencia, según se demuestre, del traslado realizado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. **ii)** En consecuencia de lo anterior, que se declare que las cosas deben volver al estado en el que se encontraban, y que por lo tanto **iii)** Protección S.A debe trasladar a Colpensiones el valor de los aportes recibidos por la afiliación, cotizaciones, bonos pensionales, títulos pensionales, rendimientos, intereses y cualquier otro concepto que esté en su cuenta de ahorro individual, **iv)** que cualquier reconocimiento prestacional realizado por Protección S.A. es nulo.

En virtud de lo anterior deprecia de Colpensiones, **v)** la reactivación de su afiliación al RPM sin solución de continuidad, recibir los referidos valores de parte de Protección S.A y computarlos como semanas cotizadas en su historia laboral, **vi)** el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos que legalmente correspondan, con los

¹ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 323. El 22 de septiembre de 2016 ésta Sala revocó el auto del 13 de julio de 2016 proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el cual declaró no probada la excepción previa de falta de integración de la litis por pasiva respecto de Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Oficina de Bonos Pensionales, y en su lugar ordenó su integración al proceso.

² 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 2/4.

intereses moratorios o la indexación. **vii)** Que se condene a las demandadas al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales causados, estimados en 200 SMLMV, o en la suma que el juez considere. **viii)** Costas del proceso a cargo de las demandadas.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 19 de octubre de 1957. Ha laborado para diferentes entidades públicas y privadas, e inició cotizaciones al Sistema General de Pensiones, a través del ISS, el 18 de julio de 1985, y para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años de edad, por lo cual es beneficiaria del régimen de transición. El 1 de junio de 2002 se trasladó al RAIS a través de Porvenir S.A, fruto de una asesoría deficitaria en la cual omitieron explicarle las características, ventajas y desventajas de ambos regímenes, los requisitos para acceder a una pensión de vejez, su derecho de retracto, entre otros, por lo que su decisión no fue espontánea, y de no haberse trasladado al RAIS hubiera accedido a su pensión de vejez en el año 2012, fecha en la cual arribó a los 55 años de edad, bajo el régimen de transición pensional en armonía con el Decreto 758 de 1990. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2002 se trasladó a ING, AFP que se fusionó por absorción con Protección S.A.

Solicitó pensión de vejez en Protección S.A. el 10 de abril de 2014, entidad que el 22 de mayo de 2015 le informa que tiene derecho a una garantía de pensión mínima equivalente al SMLMV, valor muy inferior al que le correspondería en el RPM, bien con la aplicación del Decreto 758 de 1990 o la Ley 71 de 1988, por lo que, en caso de reconocer dicha prestación, la misma deberá dejarse sin efectos.

El actuar de Porvenir S.A y Protección S.A., materializada en la pérdida del régimen de transición y sus beneficios, le han causado perjuicios consistentes en cuadros de angustia, desespero y depresión, poniendo en riesgo su estabilidad emocional y familiar.

Oposición a las pretensiones de la demanda

Las demandadas se opusieron oportunamente a las pretensiones de la demanda, así:

i. Colpensiones³

Afirma que el acto jurídico de afiliación se presume válido mientras no se demuestre la existencia de un vicio en el consentimiento al momento de haberse celebrado, o la responsabilidad fiduciaria del fondo pensional, caso en el cual la demandante debió haber demostrado los perjuicios generados por la asesoría deficiente. Excepcionó: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación de pagar pensión de vejez, falta de causa para demandar, buena fe, imposibilidad de condena en costas y lo que llamó como “declaratoria de otras excepciones”.

ii. Porvenir S.A⁴

No existen elementos fácticos, ni jurídicos que sirvan de soporte para declarar la nulidad o ineficacia de la afiliación al RAIS, además de que dicho traslado no se realizó en contra de una prohibición legal, pues por la forma en que fue constituido el Sistema General de Pensiones, el traslado de régimen es perfectamente válido. Por lo dicho, en el acto jurídico de traslado no existió vicio alguno en el consentimiento, en la medida de que la señora Márquez Racini en forma autónoma y sin existir error, fuerza o dolo suscribió el formulario de afiliación, documento que cumple con las exigencias de la Superintendencia Financiera; la AFP tampoco faltó a su deber de información respecto a la accionante, toda vez que el asesor comercial le informó sobre las características del

³ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 90/96.

⁴ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 139/184.

acto de traslado, así como su derecho de retracto. También es importante resaltar que la demandante el 27 de noviembre de 2002 decidió diligenciar un traslado hacia la AFP Santander -hoy Protección S.A-, ante quien también deprecó el reconocimiento de pensión de vejez, lo que da cuenta de su conocimiento de las características del RAIS y de su deseo de pertenecer al mismo, además no allega ninguna prueba para soportar sus dichos, siendo tal carga de la parte actora. Tampoco es admisible su traslado al RPM por estar inmersa en la prohibición legal de trasladarse de régimen por haber cumplido ya la edad exigida para acceder a la pensión de vejez.

No hay lugar al resarcimiento de perjuicios, toda vez que no se acreditó la relación causal ni el daño, ni los elementos que estructuran la supuesta responsabilidad del fondo se hallan demostrados, además, no procedió con su tasación como lo exige el artículo 206 del CGP, ni está probado cuál puede ser el monto de la mesada pensional, por el contrario, resulta cuestionable que sólo después de 13 años de haber suscrito el traslado de régimen, alegue que ha sido engañada por Porvenir S.A.

Excepcionó: falta de causa para pedir, buena fe, inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción, prescripción de la acción que pretende atacar la nulidad de la afiliación, ausencia de responsabilidad atribuible a la demandada, ausencia de prueba efectiva de daño, -inexistencia del daño alegado, y la que llamó “innominada o genérica”.

iii. Protección S.A.⁵

En el sublite no hubo violación alguna en el consentimiento de la accionante para efectuar el acto jurídico de traslado, en tanto dicha decisión se tomó libre y voluntariamente, tras haber recibido una asesoría por parte del fondo conforme los supuestos legales, se le explicaron las ventajas y desventajas de ambos regímenes, así como las características del RAIS, y prueba de ello, es el formulario de vinculación suscrito por la señora Márquez Racini, en el cual consta que dicho acto se realizó en forma libre y espontánea, solemnizándose de esta forma su afiliación. Tampoco resulta de recibo el perjuicio invocado, considerando que su traslado estuvo precedido de una asesoría integral y completa en donde se le informaron de todas las implicaciones de su decisión, y resaltando además que la pretensión de perjuicios debe estar respaldada en la configuración del daño, la culpa y el nexo causal, situación que no ocurre en el presente caso.

Narra que la actora solicitó Pensión de Garantía de Pensión Mínima de Vejez el 10 de abril de 2014, por lo cual se gestionaron los trámites pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Oficina de Bonos pensionales, para lo cual la actora suscribió declaración juramentada el 27 de abril de 2015, y que fue reconocida mediante Resolución N°14104 del 25 de mayo de 2015, bajo la modalidad de retiro programado, la cual está disfrutando desde el 22 de junio del mismo año.

Excepcionó: falta de integración del litis consorcio necesario por pasiva, inexistencia de la obligación por ostentar la calidad de pensionada, cumplimiento de los requisitos formales en la afiliación, asesoría adecuada y correcta, acto existente jurídico y válido, ausencia de vicios del consentimiento, ausencia de causa para pedir, incumplimiento del requisito de 15 años de servicios cotizados por el demandante, prescripción de la acción de nulidad del acto jurídico, pago y compensación, buena fe, prescripción.

iv. Ministerio de Hacienda y Crédito Público -litisconsorte necesario por pasiva-⁶

⁵ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 223/248.

⁶ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 334/346.

La afiliación y/o traslado de las personas entre los regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993 los determinan por mandato legal las administradoras del Sistema General de Pensiones, sin que la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público tenga injerencia alguna en la decisión que al respecto tome el afiliado respecto a pertenecer a uno u otro régimen pensional. Adicionalmente refiere que los engaños aducidos por la parte actora, deben ser demostrados por ella, siendo además imposible declarar la nulidad dada su condición de pensionada por vejez - Garantía de Pensión Mínima-, informa además que Protección S.A. solicitó la emisión del bono pensional tipo a modalidad 2 al que tenía derecho la demandante el cual fue redimido -pagado-, el 19 de octubre de 2014 a través de Resolución N° 13177 del 27 de octubre de 2014. Excepcionó: inexistencia de la obligación y excepción genérica.

Sentencia de primera instancia⁷

El 9 de julio de 2017, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia del traslado realizado por la demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida hacia el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por falta de información clara, veraz y oportuna de parte de Protección S.A y Porvenir S.A. Consecuencialmente, declaró que Protección S.A y Porvenir S.A son responsables profesionalmente de asumir la pensión de vejez de la demandante bajo el RPM y el régimen de transición pensional, para lo cual éstas AFP deberán pagar un cálculo actuarial de carácter pensional a Colpensiones, dentro de los 2 meses siguientes a la presentación del mismo por parte de Colpensiones a dichas AFP. Este cálculo se hará teniendo en cuenta las mesadas que se ordenarán pagar y que la pensión se ordenará a partir del 22 de junio de 2015.

Declaró que la señora Márquez Racini es beneficiaria del régimen de transición, por lo que le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990. Como consecuencia de ello, ordenó a Colpensiones incluir en nómina de pensionados a la demandante a partir del 1 de septiembre del 2017, para que ésta reciba una mesada pensional de \$1.533.569 pesos, incluyendo la mesada adicional de cada año y sin perjuicio de los incrementos de ley. Ordenó a Colpensiones pagar a título de retroactivo pensional, el cual se encuentra indexado hasta el 31 de agosto del año 2017, la suma de \$24.341.902, suma en la que se encuentra compensado el SMLMV pagado por Protección S.A a la demandante. Ordenó a Protección S.A. a que, dentro de los 2 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, realice la devolución al Ministerio de Hacienda y Crédito Público del bono pensional recibido por GPM, suma que además deberá ser indexada.

Declaró no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer, liquidar y pagar pensión de vejez bajo el régimen de transición a la demandante, prescripción e inexistencia de ineficacia del traslado, ni las restantes propuestas por las demandadas. Por último, condenó en costas a Protección S.A y Porvenir S.A, fijando como agencias en derecho la suma de \$7.377.770 pesos en favor de la demandante, suma que deberá ser cancelada en un 50% a cargo de cada una.

Refiriendo al precedente judicial vigente en la materia, el a quo advirtió que las AFP del RAIS tenían la carga procesal de demostrar el cumplimiento de su deber de información en el traslado de la afiliada, debido a que ejercen una actividad financiera de gestión fiduciaria, por lo que les asiste el deber de buen consejo, el cual incumplieron, generando como consecuencia la aplicación de la ineficacia del traslado en virtud del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, por atentar contra la libre elección de régimen pensional, y no se

⁷ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 479/481.

desvirtuó que el traslado representó un perjuicio económico para la afiliada, en tanto se ven afectados derechos fundamentales materializados en el monto de la pensión acorde con el estilo de vida de la cotizante.

Enfatizó en que los pensionados en el RAIS están imposibilitados jurídicamente para retornar al RPM cuando se busca que el fondo privado devuelva los conceptos a Colpensiones para que éste asuma la pensión de vejez, situación que no se configura en este caso, pues no se está ante un traslado, sino ante una sanción al fondo privado, razón por la cual, en aplicación además de las facultades ultra y extra petita con que cuenta el juez laboral, **condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez de la demandante** en el RPM **conforme al régimen de transición**, en armonía con el Acuerdo 049 de 1990, para lo cual **dispuso que Porvenir S.A y a Protección S.A. deberán asumir un cálculo actuarial de carácter pensional**, con el fin de que Colpensiones prosiga sufragando la pensión de la actora. Liquidó un retroactivo pensional hasta la fecha de la sentencia, y autorizó el descuento del salario mínimo ya pagado por concepto de garantía de pensión mínima.

Aclaró la sentencia bajo el entendido que **Protección S.A. debe devolver el bono pensional redimido** por la actora, debidamente indexado desde la fecha de su recepción hasta su devolución, y adiciona la sentencia en cuanto a que las demandadas dentro del cálculo actuarial que deben pagar, deben tomar como parte de la suma que deban pagar a Colpensiones, los aportes y los rendimientos que tienen en su posesión, no lo tienen que devolver a Colpensiones.

Recursos de apelación

Inconformes con la decisión emitida en primera instancia, ambas partes, excepto Ministerio de Hacienda y Crédito Público, formularon recurso de apelación en su contra:

i) Porvenir S.A

Solicitó revocar en su integridad el fallo proferido en primera instancia y que en su lugar sea absuelta de todos y cada uno de los cargos formulados en su contra, argumentando que la decisión es incongruente porque: **i)** en la parte motiva de la decisión dice que no hubo información respecto al acto jurídico de traslado, mientras que en la resolutive señala que el acto adoleció de información clara, veraz y oportuna; **ii)** Para la fecha en que se suscribió el traslado, se atendió a la normatividad vigente para la época, prevista por la superintendencia Financiera, que indicaban que se debía suscribir un formulario en el que conste la voluntad libre de escogencia del fondo, lo cual fue cumplido por Porvenir S.A., el cual no fue tachado de falsedad ni al momento de la contestación ni en el interrogatorio de parte, formulario que no solo contiene la declaración expresa de voluntad de afiliación, sino de la información que recibió la actora acerca del régimen de transición, indicando en el interrogatorio que se trasladó sin dudarlo, pero en la sentencia se dice que fue intimidada. Llama la atención que en su interrogatorio, la demandante aceptó que recibía pensión por parte de Protección S.A. y que el abogado Fredy, le dijo que podía reclamar la garantía de pensión mínima y luego demandar la nulidad del traslado, lo cual genera inseguridad jurídica, pues hay una serie de actos como decir que cumplía los requisitos para la garantía de pensión mínima, así como el trámite de emisión y redención del bono pensional, que se afirman ahora, tampoco tienen validez; **iii)** Refiere que el A Quo hizo uso indebido de las facultades ultra y extra petita, pues estas fueron utilizadas para reformar la demanda y emitir condenas distintas a las deprecadas, tal es el caso de la condena a Porvenir S.A y Protección S.A de pagar un cálculo actuarial a Colpensiones, así como del reconocimiento de la conmutación pensional, situaciones que no tiene ningún fundamento en las normas ni en la jurisprudencia, ni aplicación al caso concreto y dejan una ganancia grande para Colpensiones, al recibir unos rendimientos

casi del doble de los que la misma entidad hubiera generado; y v) finalmente indica que en este caso al versar sobre una ineficacia de una pensionada, si se configura la prescripción del acto jurídico de traslado.

ii). Protección S.A

Pide sea revisado en su integridad los fundamentos de hecho y derecho tomados por el juez de instancia para proferir la sentencia atacada, para absolver a la entidad de todos los cargos en su contra, exponiendo que: **i)** la ineficacia de la afiliación establecida en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 sólo opera en el evento en que se presente coacción, vulneración o presión para que el potencial afiliado acepte determinado régimen pensional, lo cual no ocurrió en el presente caso, en tanto la actora se trasladó de manera libre, voluntaria, sin presiones, en cumplimiento de los requisitos legales y previo a una respectiva asesoría, resaltando que pese a que el Despacho refirió que Santander -hoy Protección S.A- debió reasesorar a la demandante con la finalidad de ilustrarle que tenía régimen de transición y que podía devolverse al RPM, omitió que al momento del traslado a Santander, ésta ya se encontraba en la limitante de los 10 años para optar por el retorno al RPM, fecha para la cual tenía 48 años de edad y que la información obrante en la AFP es que la demandante nació en el año 1954 y no en el año 1957, transición que ya había perdido desde que se trasladó hacia Porvenir S.A.; **ii)** se duele sobre la inversión de la carga de la prueba en estos caso, pues la jurisprudencia la ha aplicado respecto de personas multifiliadas y excluidas del RAIS, lo cual no encaja en el caso de la demandante, quien tampoco logró desvirtuar con si interrogatorio que las AFP del RAIS hayan viciado su consentimiento o incumplido con su deber; **iii)** Protección S.A está en imposibilidad jurídica de pagar una conmutación pensional en la forma como lo expresó el despacho, teniendo en cuenta que la actora ya se encuentra pensionada bajo los parámetros del RAIS, de acuerdo al capital que ella logró acumular, máxime que la conmutación pensional se presenta cuando hay un incumplimiento al SGSSI de un trabajador, lo cual no ocurre en el sublite. Resalta además, que se torna inconstitucional imponer al RAIS cargas o prestaciones económicas propias de otro régimen pensional, pues el régimen privado cuenta con sus propios mecanismos de reconocimiento de prestaciones económicas; adicionalmente el juzgado en ningún momento revocó la garantía de pensión mínima de la que es beneficiaria la actora, ni consideró que para que resulte procedente la conmutación pensional que se ordena, junto con el reintegro del dinero del bono pensional a la Oficina de Bonos Pensionales, la demandante debe devolver las mesadas pensionales que ha recibido desde el momento en que se le reconoció la garantía de pensión mínima, pues de lo contrario se estaría ante un enriquecimiento ilícito; **iv)** la demandante se encuentra imposibilitada para retornar al RPM, aún aplicando la teoría de ineficacia, para lo cual cita la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado de fecha 1 de junio de 2007, radicado 19869, donde se indicó que permitir el retorno de los pensionados, se estaría ante un retracto indefinido de los contratos de pensiones que podría resultar oneroso para las entidades administradoras, en la medida de que verían reducida la rentabilidad de sus inversiones al no establecer flujos de caja predecibles, y por ello, debe tenerse de presente que permitir el traslado de quien ha adquirido el derecho a la pensión afectaría gravemente la estabilidad financiera del sistema e iría en contravía de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad del sistema de la seguridad social; **v)** Finalmente, señaló que las facultades extra y ultra petita del juez no son absolutas, pues estas sólo operan siempre y cuando los hechos que las fundamentan sean debidamente probados dentro del proceso, y en el presente, Protección S.A no incumplió con ninguna disposición legal que conduzca a la ineficacia o a la nulidad de la afiliación.

Demandante

En primer lugar centró su recurso respecto a la figura utilizada en el sublite por el Despacho y sus consecuencias, por considerar no se compadecen con el criterio pacífico que sostienen la H. Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por lo que pide al superior reevaluar dicha figura y analizar la de nulidad, puesto que por las características del presente proceso, resulta más pertinente, tal y como lo ha dispuesto el órgano de cierre en la materia, en tres sentencias por vicios en el consentimiento por un engaño, el cual se traduce en no haber dado la información correcta disponiendo la nulidad, la cual implicaría que todos los actos realizados con posterioridad, también se entiendan por nulos, entre ellos el reconocimiento de la pensión de vejez bajo la garantía de pensión mínima.

Insiste, sobre la carga de la prueba que ésta le asiste a los fondos del RAIS demandados, a quienes se les fijó la carga de demostrar su diligencia al momento de cumplir con el deber de información profesional mediante auto y guardaron silencio, deber que existe desde el Decreto 720 de 1994, que contempló la responsabilidad profesional de éstos en su artículo 10, sin que fuera acreditado por ninguna de las demandadas, demostrando la actora con su interrogatorio de parte y la testimonial arribada, que dicha información no fue brindada; resalta además que, el acto de solicitud de pensión no convalida el acto nulo, puesto que ello se debió a una circunstancia de elemental subsistencia, pues la demandante renunció a su empleo desde diciembre del año 2012 y no tenía con que subsistir, lo cual tampoco es impedimento para declarar la nulidad, porque así también lo ha resuelto la H. Corte Suprema de Justicia, y en ese entendido, las cosas deberían volver al estado en el que se encontraban antes del acto nulo de traslado, devolviendo la totalidad de los aportes a Colpensiones, sin lugar a ningún tipo de retención por administración ni por otro concepto.

Frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Oficina de Bonos Pensionales, afirma no ha sufrido ninguna afectación si se considera que su tarea consiste en aportar dinero para sostener la garantía de pensión mínima, sólo cuando se hayan agotado los ahorros del afiliado.

En forma subsidiaria, solicitó que de confirmarse la sentencia de instancia, se precise cómo debe ser el cálculo actuarial ordenado por el Aquo.

Advierte que está conforme con la aplicación del Decreto 758 de 1990 en virtud del régimen de transición por ser más beneficioso para la demandante, a efectos de liquidar la prestación de vejez de la demandante, no obstante, pide se revise el monto de la mesada pensional liquidado por el despacho, pues las cuentas realizadas por el mandatario judicial para el año 2012, quien de acuerdo a la densidad de semanas aplicó una tasa porcentual del 81%, que arrojó una mesada pensional de \$1'797.409, existiendo un error en el cálculo del juez de instancia; adicionalmente pide revisar la fecha de causación de la mesa pensional, que en este caso es diciembre del año 2012 cuando la actora dejó de cotizar, más no el año 2015 como lo definió el A Quo.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Una vez corrido el traslado a las partes para alegar en esta sede, de forma oportuna Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A. lo recorrieron, la activa se abstuvo expresamente de presentar alegatos en esta sede⁸ y la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público- no allegó escrito alguno.

⁸ 02SegundaInstancia, archivo 04MemorialDemandanteDesisteAlegatos

i) Colpensiones⁹, solicita se revoque lo decidido desde la primera instancia, reiterando para ello que la afiliación de la actora fue libre, voluntaria, espontánea y sin coacción alguna, y en señal de ello suscribió el formulario de afiliación, el cual para aquella época era el único documento exigible legalmente para efectos del traslado de régimen pensional, por lo que su traslado es completamente válido, por consiguiente, no se le puede imponer cargas procesales a la AFP que no están obligados a soportar, máxime cuando estos traslados están generando un detrimento al sistema general de pensiones que es contrario al principio de sostenibilidad financiera del sistema. Tampoco es admisible la inaplicabilidad constitucional porque vulnera el derecho al acceso de la seguridad social en pensiones, tampoco puede imponerse a Colpensiones la carga de recibir nuevamente a la afiliada y reconocerle una eventual pensión ni es viable la subrogación pensional, pues en reciente sentencia, la SL-373 de 2021 la CSJ, abrió la posibilidad que los fondos privados restablezcan el perjuicio causado a los afiliados, en este caso, al momento de una eventual pensión la misma debe estar en cabeza del fondo privado, quien a título de perjuicios es quien debe reconocer la indemnización al afiliado por los daños causados en la desmejora de su mesada, y de esta forma salvaguardar los recursos de Colpensiones quien fue un tercero ajeno al acto jurídico celebrado entre la demandante y el fondo privado, reflexionando especialmente respecto a que al adquirir el status de pensionado en el RAIS es imposible retornar al statu quo ante, argumentando que se torna inviable la realización de los efectos de la ineficacia, por cuanto no es posible cesar los efectos jurídicos de las operaciones, contratos y actos que involucran a terceros como aseguradoras, entidades oficiales e inversiones.

Ahora, en caso de llegarse a confirmar la ineficacia del traslado, pide se ordene a la AFP Protección S.A. a devolver la totalidad de los aportes realizados por la demandante, esto es, porcentaje de garantía de pensión mínima, porcentaje de gastos de administración, porcentaje de primas de seguros de invalidez y muerte, rendimientos y ahorros, así como el respectivo cálculo actuarial, en caso de que los recursos provenientes de Protección S.A. no sean suficientes para el pago de la pensión de vejez, con el fin de que ésta quede obligada a balancear los valores, de forma indexada.

ii) Porvenir S.A.¹⁰, pide se revoque en su integridad la sentencia del juez de primera instancia, ya que ésta se aparta abiertamente del precedente vertical establecido uniformemente por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo órdenes y condenas que exceden las potestades judiciales, abriendo campo a la consolidación de un tercer régimen pensional, en el que la entidad encargada del financiamiento de la pensión es Porvenir S.A., pero en los términos de reconocimiento establecidos para la administradora del RAIS <sic>, lo cual se trata de un imposible jurídico. Señala además que no se probó ningún perjuicio y aun así se está imponiendo una condena a título de indemnización a Porvenir S.A., resultando excesiva la condena, debiendo centrar la revisión de las solicitudes de traslado de régimen, en criterios técnicos en los que se determine que no se generará una afectación al Sistema General de Pensiones, conforme a los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

También hace cita de las sentencias SL-373 del 2021 de la SL de la CSJ, en que se negó la ineficacia de la afiliación de una persona pensionada bajo el RAIS, aduciendo que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada que no es posible revertir porque ello daría lugar a disfuncionalidades en el sistema de pensiones que podrían comprometer su financiamiento, y la sentencia proferida el 14 de agosto de 2019 por el

⁹ 02SegundaInstancia, archivo 10AlegatosColpensiones.

¹⁰ 02SegundaInstancia, archivo 11AlegatosPorvenir.

Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral, en proceso bajo radicado 05001-31-05-007-2015-01295-01, donde también se consideró que permitir el traslado de una administradora de pensiones a otra, una vez se ha adquirido la calidad de pensionado, puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Protección S.A.¹¹, refiere que la sentencia emitida desde la primera instancia contaría la Constitución Política y la legislación vigente en materia de seguridad social al ordenar a la AFP del RAIS que a título de indemnización reconozca una prestación económica bajo el imperio de una normatividad que no le es propia al régimen que administra y al que se encuentra válidamente afiliada la actora, en la medida de que Protección S.A. cumplió con su deber de información al brindarle a la actora todas las herramientas necesarias para que tomara la decisión que más creía conveniente, contando además con las facultades de retornar al RPM, sin que nunca hiciera uso de ellas, confirmando por el contrario, su decisión de pertenecer al RASI al solicitar la pensión de vejez el 10 de abril de 2014, la cual fue efectivamente reconocida bajo mecanismo de Garantía de Pensión Mínima.

Añade que la condena a reparar el daño causado a la demandante, atenta el principio de congruencia, según el cual el juez solo puede pronunciarse respecto de lo pedido y discutido en el proceso, no estando acreditado en el proceso los supuestos perjuicios que le fueron causados a la demandante, ni se demuestra el nexo causal entre el hecho dañoso y el supuesto daño.

Finalmente, indica que según el artículo 107 de la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia de las Altas Cortes, el traslado solo es dable para las personas que ostentan calidad de afiliados al Sistema General de Pensiones, más no para quienes ya tienen calidad de pensionados, entre ellas la Sentencia 19869 del 1 de junio de 2017 del Consejo de Estado, la sentencia C-841 de 2003 de la Corte Constitucional, la sentencia con radicado 00873 proferida el 18 de septiembre de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la SL-373 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, ésta última en que se puede concluir que abrir la posibilidad del retorno al RPMPD a una persona que ya ostenta el estatus de pensionado en el RAIS, atenta contra la sostenibilidad financiera del sistema, razones por las que deprecia la revocatoria de la sentencia de instancia y se le absuelva de todas las condenas emitidas en su contra.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, quien ostenta la calidad de pensionada con garantía de pensión mínima en dicho régimen de ahorro individual; en caso afirmativo, **ii)** determinar las consecuencias que conllevaría dicha declaratoria y en caso negativo, **iii)** analizar la procedencia o no de la indemnización de perjuicios.

¹¹ 02SegundaInstancia, archivo 12AlegatosProteccion.

Hechos relevantes probados documentalmente

- Luisa del Socorro Márquez Racini nació el 19 de octubre de 1954¹².

- De las historias laborales para bono pensional emanadas de la Oficina de Bonos Pensionales de Min Hacienda, se desprende que la demandante prestó servicios en favor del Hospital Universitario de Sincelejo -ESE, desde el 05 de febrero de 1981 hasta el 17 de febrero de 1982, periodos que no obran cotizados en la historia laboral del ISS¹³.

Las historias laborales emanadas de Colpensiones, actualizada al 14 de febrero de 2017, informan que cotizó 756,11 semanas cotizadas, entre el 18 de julio de 1985 y el 30 de mayo de 2002¹⁴.

- Suscribió formulario de traslado hacia Porvenir S.A.¹⁵ el 23 de abril de 2002, el cual inició su efectividad el 1° de junio de 2002, posteriormente solicitó traslado hacia ING Pensiones y Cesantías el 27 de noviembre de 2002¹⁶, quien fue cedida por fusión a Protección S.A. el 31 de diciembre de 2012, información corroborada con reporte SIAFP del 26 de abril de 2016¹⁷.

- Acorde con historia laboral expedida el 12 de diciembre de 2016 por la OBP., inició cotizaciones ante el RPM el 5 de febrero de 1981 alcanzando a reunir antes de la vigencia del actual sistema pensional, 405.86 semanas¹⁸.

- El 14 de marzo de 2014, Protección S.A. en respuesta a solicitud del 11 de marzo del mismo año de reconocimiento de pensión de vejez, informa a la actora que no ha radicado solicitud de prestación, la cual debe formalizar ante la entidad¹⁹.

- Obra formato de solicitud de prestación de vejez, de Garantía de Pensión Mínima, del 10 de abril de 2014²⁰, junto con declaración juramentada para la solicitud de garantía de pensión mínima ante la Oficina de Bonos Pensionales del 27 de abril de 2015²¹.

- Mediante Resolución N°13177 del 27 de octubre de 2014 la Oficina de Bonos Pensionales de Min Hacienda, ordenó el pago del cupón principal a cargo de la Nación en los bonos pensionales de afiliados al RAIS, dentro de los que se encuentra la demandante²²

- El 04 de mayo de 2015 se radicó ante la Oficina de Bonos Pensionales de Min Hacienda, solicitud de reconocimiento de garantía de pensión mínima para la señora Márquez Racini²³, la cual fue reconocida mediante Resolución N°14104 del 25 de mayo de 2015²⁴, indicando que la fecha de agotamiento de los recursos de la cuenta de ahorro individual de la demandante está prevista para el 1° de noviembre de 2028.

¹² 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 37

¹³ 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 45 y 409

¹⁴ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 444/451

¹⁵ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 186

¹⁶ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 491

¹⁷ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 290

¹⁸ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 367

¹⁹ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 251/252

²⁰ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 253 y 256

²¹ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 259

²² 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 360/364

²³ 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 370/374

²⁴ 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 375/379

- El 29 de mayo de 2015 la Oficina de Bonos Pensionales remite a Protección S.A. resolución de reconocimiento de Garantía de Pensión Mínima de varios afiliados²⁵, siendo en el caso de la señora Márquez Racini de manera definitiva.

- **El 22 de mayo de 2015, le fue reconocida pensión de vejez²⁶** por Garantía de Pensión Mínima Temporal, teniendo en cuenta 1.178,71 semanas cotizadas en toda la vida laboral, en mesada equivalente de \$644.350 para dicho año, junto con un retroactivo pensional liquidado desde el 22 de diciembre de 2012 hasta el 30 de mayo de 2015 por valor de \$11'299.750, respecto de la cual se desconoce cómo su fue notificada si personalmente, por correo certificado, aviso o correo electrónico.

- Certificado expedido el 2 de julio de 2017 por Protección S.A. donde señala que la señora Márquez Racini se **encuentra pensionada por vejez desde el 22 de junio de 2015, recibiendo una mesada pensional de \$737.717** mensual sobre el cual tiene descuentos por pago a EPS²⁷, junto con certificado de mesadas recibidas desde dicha fecha hasta marzo de 2018.

- El 24 de abril de 2015, radicó reclamación ante Colpensiones²⁸, Porvenir S.A.²⁹ y Protección S.A.³⁰, solicitando nulidad del traslado al RAIS y el reconocimiento de pensión de vejez, lo cual fue negado el 27 de abril del mismo año por parte de Colpensiones³¹ por improcedente, el 27 de abril por parte de Porvenir S.A., por no encontrarse vigente su afiliación ante la entidad³² y finalmente Protección S.A. en respuesta del 5 de mayo de 2015³³ señaló que su afiliación al RAIS se presume válida.

a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, estando pensionada por vejez en este régimen.

Frente a dicha temática, esta Sala era del criterio que la ineficacia podía declararse con independencia de si el solicitante se encontraba o no disfrutando de su pensión en el RAIS, por estimar sin distinción alguna, que lo relevante era el cumplimiento material de los requisitos del acto de traslado de régimen, especialmente la acreditación del consentimiento informado, cuya omisión por parte del llamado a demostrarlo genera la declaratoria de ineficacia de la afiliación o del traslado de régimen pensional, en consonancia con la jurisprudencia que sobre el tema ha decantado la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, en aras de garantizar la satisfacción plena y total del derecho pensional.

Sin embargo, dicho órgano de cierre de esta jurisdicción dejó claro que cuando el solicitante ha consolidado una situación dentro del Régimen de Ahorro Individual, la evaluación y determinación de la ineficacia trasciende a algunas situaciones jurídicas que se encuentran causadas jurídicamente y que por tanto deben ser respetadas, so pena de afectarse con ello derechos de terceros que han intervenido en el proceso pensional, con graves consecuencias que eventualmente repercutirían en el sistema de seguridad social.

²⁵ 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 274/276

²⁶ 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 277/279

²⁷ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 470/472

²⁸ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 20/22

²⁹ 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 30

³⁰ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 33/34

³¹ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 28/290

³² 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 32

³³ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs. 35/36

Es así que en sentencia SL 373 del 2021³⁴ el alto tribunal, ante el interrogante de si es posible acceder a la ineficacia de traslado de quien ya se encuentra pensionado, expuso cómo la consolidación de un status en el RAIS acompañado del agotamiento de los recursos de la CAI y los eventuales bonos pensionales impide retrotraer los efectos de la migración entre regímenes, precisando así:

Basta con relevar algunas situaciones:

Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que revertir esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.

Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, 1 SL1688-2019, SL3464-2019 Radicación n.º 84475 SCLAJPT-10 V.00 16 renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.

Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.

*Por lo tanto, no se trata solo de revertir el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas,
Si se trata de una según sea la modalidad pensional elegida.*

*(...) **garantía de pensión mínima**, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de Radicación n.º 84475 SCLAJPT-10 V.00 17 la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requeriría la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defiendan los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.*

Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados,

³⁴ Posición que ha sido reiterada en providencias tales como SL 2198 de 2022, SL 1798 de 2022, SL 2042 de 2022 entre otras.

inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.

Sobre la improcedencia de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional respecto de los pensionados en el RAIS, esta Sala de Decisión ha interpretado que además de tener reconocida la pensión de vejez, el solicitante debe encontrarse disfrutando de esa prestación, porque no de otra manera se evidenciaría el deterioro del capital en razón del pago de las mesadas pensionales que afecte financieramente el RPM. Siendo un hecho cierto que en ese sentido el capital permanecería incólume, y en cuanto al bono pensional redimido, es factible recuperar la pérdida de su poder adquisitivo por efecto de la inflación, no pudiendo interpretarse que en este caso haya perdido su integridad.

Se destaca que la conclusión a la que arribó el fallador de instancia impone a Colpensiones una carga pensional que si bien tendría un respaldo económico, representado en un cálculo actuarial a cargo de las AFP responsables del traslado de régimen del afiliado, no es posible esta solución híbrida a la luz de las normas de seguridad social, por no estar prevista en nuestro régimen jurídico, menos aún para el caso de quien ya viene disfrutando de pensión de vejez tipificada en el RAIS, respecto de quien no existe la posibilidad de declarar ineficacia de su afiliación al RAIS, por las razones expuestas.

Bajo las referidas circunstancias, conforme a las particularidades del presente asunto, evento no está llamada a prosperar la pretensión de declaratoria de ineficacia, lo que consecuentemente genera la revocatoria de las órdenes de reactivación de la afiliación en el RPM, el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones con las compensaciones que dispuso el A quo, a través de cálculo actuarial, al igual que la anulación del bono pensional, órdenes contenidas en la parte resolutive de la sentencia conocida en apelación y consulta.

En suma, la calidad de pensionada que se encuentra disfrutando de su prestación conlleva una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, y revertirlos afecta derechos, deberes y relaciones jurídicas de múltiples intervinientes del sistema pensional, con efecto financiero desfavorable al SGSSP.

De ahí que, el órgano de cierre en la materia recoge el criterio adoptado en sentencia primigenia con Radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, donde bajo la figura de nulidad de traslado, ordenó el traslado del allí demandante pensionado en el RAIS con destino hacia Colpensiones.

No obstante, en la providencia en cita, dicha Corporación abrió la compuerta para que el pensionado en disfrute de su prestación, cuando considere afectado en su derecho en virtud del incumplimiento al deber de información por parte de la administradora de fondo de pensiones pretenda de ésta la indemnización de los perjuicios sufridos en la cuantía de su pensión.

En tal virtud, la Sala adopta la reciente postura de la Alta Corporación expuesta en **la Sentencia 373 de 2021**, -en la que además abandona expresamente el criterio de la Sentencia con Rad. 31989 de 2008-, y recoge la que en contrario se hubiere emitido dentro de otro proceso, por parte de esta Sala de Decisión Laboral, por ser de obligatorio cumplimiento al tratarse de precedente vertical en la materia y estimar que contiene la interpretación más acertada sobre estos asuntos donde la solicitud, reconocimiento y

disfrute de pensión de vejez en el RAIS, implica un acto jurídico consolidado, y una serie de actos donde intervienen terceros de buena fe, indiferentemente de la modalidad pensional acogida por el pensionado e inclusive en aquellos casos en que se otorgue y disfrute Garantía de Pensión Mínima. Lo anterior, valga resaltar, sin perjuicio de la facultad que tienen los demandantes de acudir a la reparación de los perjuicios que consideren ocasionados en razón del incumplimiento al deber de información por parte de las administradoras de los fondos pensionales del RAIS, que deriven en la diferencia en disfavor de la mesada pensional.

Caso concreto

En consonancia, se aborda el sublite, y se verifica mediante la prueba documental allegada que, Luisa del Socorro Márquez Racini nació el 19 de octubre de 1954³⁵, por lo que, al 01 de abril 1994, cuando inició vigencia el SGSSP ostentaba la calidad de trabajadora dependiente del sector privado, al servicio de Consulmedica LTDA³⁶, contaba con menos 39 años de edad y menos de 15 años de servicio o semanas de cotización, consecuentemente, en principio fue beneficiaria por edad, del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El 23 de abril de 2002 suscribió formulario de traslado de régimen pensional con destino a Porvenir S.A.³⁷ el cual acusa de ineficaz; posteriormente el 27 de noviembre de 2002³⁸ se trasladó con destino hacia ING Pensiones y Cesantías, entidad cedida por fusión a Protección S.A. el 31 de diciembre de 2012. Su solicitud de retorno al RPM elevada el 24 de abril de 2015 a Colpensiones, fue despachada desfavorablemente, por encontrarse a menos de 10 años de cumplir la edad pensional³⁹, Protección S.A.⁴⁰ y Porvenir S.A.⁴¹ también la negaron.

La demandante, ostenta el status de pensionada⁴² **en el RAIS desde el 22 de junio de 2015⁴³, fecha en que le fue concedida y se encuentra disfrutando** en virtud del reconocimiento de **Garantía de Pensión Mínima Definitiva** por parte de Protección S.A., de forma retroactiva desde el 22 de diciembre de 2012 y en virtud del reconocimiento por parte de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Resolución N°14104 del 25 de mayo de 2015⁴⁴, indicando que la fecha de agotamiento de los recursos de la cuenta de ahorro individual de la demandante está prevista para el 1° de noviembre de 2028.

En el sub judice, se recaudó interrogatorio a la demandante, sin que se produjera confesión de su parte, pues en torno a las condiciones de su traslado hacia el RAIS, manifestó que se presentó ante una visita grupal que recibieron en su lugar de trabajo varios empleados, donde un asesor de Porvenir S.A. les indicó que el ISS desaparecería y que el fondo privado era igual a éste, por lo que no había problema respecto del régimen de transición; sobre su migración hacia ING Pensiones y Cesantías -hoy Protección S.A. expresó que fue su empleador quien directamente la trasladó a dicha AFP, sin que le fuera brindada asesoría alguna. Aceptó, además, que se acercó voluntariamente ante Protección S.A. solicitando la pensión de vejez, a través de garantía de pensión mínima, porque llevaba varios años sin disfrutar de la prestación y necesitaba ese dinero, además que, por asesoría de su apoderado judicial, le dijo que podría solicitar la prestación de vejez y más tarde demandar con el fin de revocar la prestación con miras a acceder a

³⁵ 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 37

³⁶ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 444/451

³⁷ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 186

³⁸ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 491

³⁹ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 28/29

⁴⁰ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs. 35/36

⁴¹ 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 32

⁴² 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 277/279

⁴³ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 470/472

⁴⁴ 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 375/379

una pensión en el RPM. Informa que trabajó hasta el año 2012, pero que ha realizado varios contratos esporádicos con el Ministerio de Salud hasta enero de 2017, por los que ha realizado cotizaciones.

Dentro de la primera instancia se recibió el testimonio de la señora Luz Dary Cadavid Muñoz, quien afirma conocer a la demandante desde el año 2000 o 2002, por haber sido compañeras de trabajo. Sobre las condiciones de traslado al RAIS señaló que su jefe en esa época las citó a una reunión con un asesor de Porvenir S.A, quien les explicó que el ISS se iba a acabar y que podrían perder su dinero, sin explicarles las características de ambos regímenes, ni comparativo entre regímenes, tampoco le mencionaron de la transición por edad, y aceptó que aun cuando no presencié el momento en que la demandante firmó el formulario de afiliación, su conocimiento deriva de haber estado en la reunión sostenida entre la asesora del fondo y los trabajadores.

En este caso, la AFP Porvenir S.A., como encargada de tramitar el traslado de régimen pensional, estaba llamada a demostrar que ese ese traslado no se vio afectado en su eficacia por haberle suministrado la información suficiente, clara, completa al entonces potencial afiliado, sin embargo no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar a la hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en el posible afiliado, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

De ello no hay elementos de convicción en el plenario distintos del formulario de afiliación en ésta, sobre el cual la AFP Porvenir S.A. adujo que, estando suscritos por la demandante, quien lo hizo de manera libre y voluntaria, no es dable restarle valor y menos desconocer este acto; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. conforme al **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado recae en quien debió emplearlo y, ello no se satisface solo con allegar documentos previamente elaborados en los que se limita a llenar espacios en blanco, que suscriben las partes, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo cual, es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales, no

se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de haber transmitido elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Adicionalmente, deviene innecesario analizar las condiciones de afiliación a Protección S.A., pues la ineficacia del traslado de régimen afecta todo traslado entre administradoras que se haya presentado con posterioridad.

Y si bien, lo anterior, permite concluir en que, la pasiva no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar a la hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales, lo cierto es que, **al ostentar calidad de pensionada en el RAIS, por Garantía de Pensión Mínima desde el año 2015** y acoger esta Sala el criterio adoptado por la Sala Especializada de la Sala Laboral de Decisión de esta Corporación, así como lo dilucidado en precedente citado de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, **no es posible acceder a la ineficacia de la afiliación** por el incumplimiento de las mencionadas obligaciones, al configurarse tras su reconocimiento rogado, una serie de actuaciones en que han participado distintos actores del sistema y terceros de buena fe, como en este caso el de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en lo que toca con la redención del bono pensional, que indefectiblemente conllevaría un impacto negativo al sistema pensional colombiano y a situaciones insostenibles para éste.

Por las motivaciones expuestas, se **revocará** la sentencia conocida en apelación, para en su lugar denegar la ineficacia de traslado deprecada.

Ahora bien, dado que, con sujeción a las reglas previstas por la Corte Suprema de Justicia, se puede pretender el pago de indemnización de perjuicios por parte del fondo pensional del RAIS, como consecuencia del incumplimiento a su deber de información, y que dicha pretensión está incluida en el petitum de la demanda, al haber sido objeto de discusión en el proceso se procederá con su estudio.

b) Indemnización de perjuicios

El precepto normativo llamado a regir la indemnización plena de perjuicios solicitada, según lo advertido por la H. Corte Suprema de Justicia, en la providencia citada, es el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que señala:

“ARTICULO 16. VALORACIÓN DE DAÑOS. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.”

Para efectos de determinar los perjuicios materiales causados a la actora con la suscripción del acto de traslado de régimen pensional, sin la debida asesoría, se hace necesario analizar las condiciones en que se le hubiera reconocido pensión de vejez en el Régimen de Prima Media, para lo cual se consideran los siguientes elementos fácticos y jurídicos:

La señora Márquez Racini nació el 19 de octubre de 1954⁴⁵, por lo que, por lo que, al 1° de abril 1994, cuando inició vigencia el SGSSP ostentaba la calidad de trabajadora

⁴⁵ 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 37

dependiente del sector privado, al servicio de Consulmédica Ltda.⁴⁶, contaba con 39 años de edad y menos de 15 años de servicio o semanas de cotización, consecuentemente, en principio fue beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por edad, prestando además servicios a través de entidades del sector público del sector departamental, y **cumplió los 55 años de edad el 19 de octubre de 2009**, por lo cual conservó el régimen de transición del que es beneficiaria, momento en que tenía **1025 semanas cotizadas** y un total de 1.188,11 semanas -como se observa en el cuadro anexo a esta providencia-, siendo aplicable para ella la Ley 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, en virtud del régimen de transición estipulado en el art. 36 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, la prestación de vejez, **hubiera podido ser reconocida con base en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993** por haber conservado el régimen de transición **y de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990** aprobado por el Decreto 758 de 1990, por resultarle más favorable en virtud de la tasa porcentual aplicable, al haber acreditado **1.188,11 semanas** cotizadas, de las cuales había sufragado más de 1000 en toda su vida laboral anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, por ende, a partir de ese momento se entiende causada la prestación de vejez.

Respecto al disfrute de la prestación, cabe precisar que la última cotización al SGSSP la efectuó la demandante el 21 de diciembre de 2012⁴⁷, por lo que su reconocimiento se ordenaría a partir del día siguiente.

Es claro entonces que al 1 de abril de 1994 faltaban a la hoy demandante más de 10 años para adquirir el derecho pensional, por lo cual, la norma que se hubiera aplicado en materia de IBL correspondería al art. 21 de la Ley 100 de 1993 y al no acreditar una densidad superior a 1.250, la liquidación corresponde a la del promedio de los salarios cotizados en los últimos 10 años actualizados anualmente con el IPC, y una tasa de reemplazo del 84% calculada conforme lo prevé el artículo 20 del parágrafo 2° del Acuerdo 049 de 1990, dichas operaciones determinan que a la demandante le hubiera asistido una mesada pensional para de \$1'855.380 a partir del 22 de diciembre de 2012 y para el año 2022 le hubiera correspondido percibir una mesada de \$2'713.141 con los respectivos incrementos anuales de ley, valores que permiten calcular la indemnización de perjuicios.

En virtud de lo anterior, hay lugar a ordenar a Porvenir S.A. -fondo encargado del primer traslado al RAIS- a reconocer y pagar en favor de la demandante a título de indemnización de perjuicios materiales equivalente a **\$203.609.940**, calculado desde el 22 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2023, por concepto de la diferencia del valor que le hubiera correspondido a la actora recibir en el RPM de haberse pensionado en dicho régimen y a la recibida en el RAIS, como se muestra a continuación.

Liquidación indemnización de perjuicios						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2012	2,44%	\$ 566.700	\$ 1.855.380	\$ 1.288.680	9 días	\$ 386.604
2013	1,94%	\$ 589.500	\$ 1.900.651	\$ 1.311.151	13	\$ 17.044.967
2014	3,66%	\$ 616.000	\$ 1.937.524	\$ 1.321.524	13	\$ 17.179.811
2015	6,77%	\$ 644.350	\$ 2.008.437	\$ 1.364.087	13	\$ 17.733.135
2016	5,75%	\$ 689.454	\$ 2.144.408	\$ 1.454.954	13	\$ 18.914.408
2017	4,09%	\$ 737.717	\$ 2.267.712	\$ 1.529.995	13	\$ 19.889.935

⁴⁶ 02Expediente1Cuaderno0320150844, págs 444/451
⁴⁷ 02Expediente1Cuaderno0320150844, pág. 490

2018	3,18%	\$ 781.242	\$ 2.360.461	\$ 1.579.219	13	\$ 20.529.852
2019	3,80%	\$ 828.116	\$ 2.435.524	\$ 1.607.408	13	\$ 20.896.305
2020	1,61%	\$ 877.803	\$ 2.528.074	\$ 1.650.271	13	\$ 21.453.523
2021	5,62%	\$ 908.526	\$ 2.568.776	\$ 1.660.250	13	\$ 21.583.250
2022	13,12%	\$ 1.000.000	\$ 2.713.141	\$ 1.713.141	13	\$ 22.270.835
2023		\$ 1.160.000	\$ 3.069.105	\$ 1.909.105	3	\$ 5.727.316
TOTAL						\$ 203.609.940

Para evitar la devaluación del valor de esta condena con el paso del tiempo, se ordenará su indexación teniendo en cuenta como IPC inicial el certificado por el DANE el de la fecha en que se profiere esta sentencia y como IPC final el de la fecha de su pago, según la siguiente fórmula, avalada por la H. Corte Suprema de Justicia en la materia:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{V. ACTUALIZADO}$$

Los valores con los que ha de reemplazarse la fórmula deben ser:

El ÍNDICE FINAL certificado por el DANE que corresponde al de la fecha en que haya de efectuarse el pago;

El ÍNDICE INICIAL corresponde a la fecha de exigibilidad del valor a indexar.

El VALOR A INDEXAR corresponde al valor a indexar.

Adicionalmente, **se ordenará a PORVENIR S.A. a continuar pagando a partir del 1° de abril de 2023, y de forma vitalicia el valor calculado** a título de indemnización, el valor de \$1’909.105, sin perjuicio de los aumentos de ley anuales, por los 12 meses del año, y una suma adicional en diciembre de cada año.

Perjuicios morales

Sobre el perjuicio moral, también deprecado con la demanda, ha de indicarse que este perjuicio se entiende como aquellos, dolores y padecimientos que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, **constituyen un sacrificio de intereses puramente morales**, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria.

Como en este caso, la indemnización tiene una función **básicamente satisfactoria** y no reparatoria del daño causado; y en la medida en que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar **su existencia**, pero no una **medida patrimonial exacta frente al dolor**, es por eso que corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado a la demandante.

i) Desde la sentencia identificada con el **Radicado 8533 de diciembre 12 de 1996** de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recogió el criterio que hasta ese momento se tenía en relación con este tipo de perjuicios y **en ella después, de analizar la noción de perjuicio moral y sus clases de acuerdo con lo enseñado por la Sala Civil de la misma Corporación** en el contexto de los conflictos jurídicos que se someten a esta jurisdicción, en el marco de una relación de trabajo.

ii) En el mismo sentido, debe señalarse que, si en el contexto de la relación sustancial existente entre una Administradora del Sistema General de Pensiones y el afiliado se lesiona el **patrimonio moral** de éste por razón del claro incumplimiento en sus obligaciones, resulta procedente la condena al pago de las sumas que señale el Juzgador de acuerdo con su arbitrio. Para ello, se debe tener en cuenta que el daño moral da lugar a dos clases de perjuicios morales:

- a. **Los que afectan la “parte social del patrimonio moral”** porque lesionan el honor, la reputación y las consideraciones sociales, bienes jurídicos protegidos por las leyes que sancionan la calumnia, la injuria y la difamación.
- b. **Los que generan los “perjuicios de afección”**, que son aquellos que específicamente vulneran la **parte afectiva** de este patrimonio moral, a saber, las convicciones y los sentimientos de amor dentro de las vinculaciones familiares, producidos, por ejemplo, por la pérdida de personas queridas o el daño que ellas sufren, o la destrucción o deterioro de objetos materiales representativos de ese valor de afección.

iii) Esta clasificación del PERJUICIO MORAL resulta absolutamente relevante en relación con las **CARGAS PROBATORIAS** de quién pretende se condene a este tipo de perjuicios, pues de acuerdo con el precedente jurisprudencial, la **PRESUNCIÓN DEL PERJUICIO a favor del demandante**, sólo opera cuando es dañado el **“mero interés sentimental o de afecto”**, que dice relación a los **“perjuicios de afección”**, pues en los casos en que se pretende el reconocimiento del **PERJUICIO MORAL PROPIAMENTE DICHO**, se debe probar el daño que se causa a la “parte social del patrimonio moral”, que es la lesionada cuando se atenta contra el honor, la reputación y las consideraciones sociales que la Ley protege.

iv) Esta distinción también se advierte en la Jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha considerado procedente la **PRESUNCIÓN DE AFLICCIÓN** solo en los siguientes casos:

a) Cuando se afecta la **VIDA** o la **INTEGRIDAD PERSONAL**, evento en el que incluso sólo opera en relación con los **FAMILIARES CERCANOS (padres, hijos, hermanos)**.

b) En el mismo sentido, de acuerdo con esta Corporación, también opera esta **PRESUNCIÓN DE AFLICCIÓN** en los casos en que la VICTIMA reclama para sí la indemnización por daño moral, cuando ha padecido **DOLENCIAS FISICAS**, señalando que por aplicación de máximas de la experiencia, es posible inferir que quien ha padecido dolencias físicas ha sufrido también perjuicios morales

c) Y en tercer lugar, también se ha concluido la **PRESUNCIÓN** en casos de **PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD**

d) En cambio, en casos como el que hoy ocupa la atención de la Sala en el que una persona fue sometida a un proceso disciplinario que fue declarado nulo, el Consejo de Estado concluyó que el PERJUICIO MORAL no se presume, y debe probarse señalando lo siguiente:

*“El perjuicio moral es entendido como la afectación sufrida de bienes no patrimoniales que causa a una persona un acto contrario a derecho. Con su reconocimiento se busca compensar el dolor antijurídico, el impacto sentimental, que sufrió una persona como consecuencia del proceder del Estado. Considera la Sala, contrario a lo afirmado por el Tribunal, que **dentro del proceso no obran pruebas que permitan inferir la angustia que le causó al actor el adelantamiento de un proceso disciplinario en su contra. La***

aflicción subjetiva como consecuencia del actuar de la administración cuestionado debe demostrarse, no puede presumirse.

v) Finalmente, **la Corte Constitucional** en casos relacionados con PERJUICIO MORAL en los que se discute la vulneración de derechos como el honor, la dignidad, el buen nombre y **otro tipo de consideraciones sociales**, también ha considerado **la necesidad de PROBAR dentro del proceso el daño**, en sentencias como la **T-212 de 2012, T 1190 de 2004**,

Consecuente con lo expuesto, concluye esta Sala de Decisión que en este proceso la parte demandante tenía la carga de **probar el daño sufrido, la angustia, el sufrimiento** ocasionado como consecuencia de los efectos generados por las AFP del RAIS, porque en razón del incumplimiento en las obligaciones de INFORMACIÓN y ASESORÍA que le impone la Ley, la demandante se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida siendo beneficiaria del Régimen de Transición, lo que generó la pérdida de éste, lo cual no acreditó en el transcurso del proceso, pues no allegó documental ni testimonial que den cuenta de la aflicción y angustia generados con motivo de su traslado al RAIS, por lo que se negarán los mismos.

III. EXCEPCIONES

En grado jurisdiccional de consulta se estudian, además, las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción respecto de la indemnización de perjuicios, acorde a la postura de la H. Corte Suprema de Justicia, en cuanto refiere que *“el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento”*. de manera que en el sublite la prestación de vejez fue reconocida por parte de Protección S.A. a partir del 22 de junio de 2015, con retroactividad desde el 22 de diciembre de 2012, y al haberse instaurado la demanda ordinaria el 30 de septiembre de 2015, no se configuró el fenómeno extintivo de la prescripción.

IV. COSTAS

Sin costas en esta sede por haber prosperado parcialmente los recursos de ambas partes.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el 15 de septiembre de 2020, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por LUISA DEL SOCORRO MÁRQUEZ RACINI contra COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A, para en su lugar declarar probadas las excepciones formuladas por las demandadas de inexistencia de la

obligación de ineficacia de traslado por ostentar calidad de pensionada que viene disfrutando de su prestación de vejez.

SEGUNDO: DECLARAR que a la demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la indemnización plena de perjuicios por concepto de la diferencia del valor que le hubiera correspondido a la actora recibir en el RPM de haberse pensionado en dicho régimen - de no haber efectuado el traslado de régimen pensional, - y a la recibida en el RAIS, entre el 22 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2023, y como consecuencia de ello, se **CONDENA** a PORVENIR S.A. – AFP encargada de efectuar el traslado de régimen-, a pagar el equivalente a **\$203.609.940**, suma que deberá ser indexada desde la fecha en que se profiere esta sentencia hasta la fecha de su pago, conforme se advirtió en los considerandos.

A partir del 1° de abril de 2023 PORVENIR S.A. continuará pagando **de forma vitalicia** a título de indemnización, el valor de \$1'909.105, sin perjuicio de los aumentos de ley anuales, por los 12 meses del año, y una suma adicional en diciembre de cada año.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

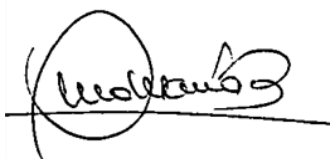
Se ordena notificar por edicto lo decidido.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARIA PATRICIA YEPES GARCIA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
(En ausencia justificada)

ANEXO:

CALCULO IBL ULTIMOS 10 AÑOS LABORAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

F. INICIAL	26-sep-99	TOTAL DIAS	3600
F. FINAL	21-dic-12		

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DIAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	INDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	INDICE IPC INICIAL
26-sep-99	30-sep-99	\$ 986.700	5	\$ 2.063.958	\$ 2.867	2011	76,19	1998	36,42
1-oct-99	31-oct-99	\$ 986.700	30	\$ 2.063.958	\$ 17.200	2011	76,19	1998	36,42
1-nov-99	30-nov-99	\$ 986.700	30	\$ 2.063.958	\$ 17.200	2011	76,19	1998	36,42
1-dic-99	31-dic-99	\$ 1.480.050	30	\$ 3.095.937	\$ 25.799	2011	76,19	1998	36,42
1-ene-00	31-ene-00	\$ 1.026.200	30	\$ 1.965.165	\$ 16.376	2011	76,19	1999	39,79
1-feb-00	29-feb-00	\$ 1.026.200	30	\$ 1.965.165	\$ 16.376	2011	76,19	1999	39,79
1-mar-00	31-mar-00	\$ 1.026.200	30	\$ 1.965.165	\$ 16.376	2011	76,19	1999	39,79
1-abr-00	30-abr-00	\$ 1.368.267	30	\$ 2.620.221	\$ 21.835	2011	76,19	1999	39,79
1-may-00	31-may-00	\$ 1.026.200	30	\$ 1.965.165	\$ 16.376	2011	76,19	1999	39,79
1-jun-00	30-jun-00	\$ 1.539.300	30	\$ 2.947.748	\$ 24.565	2011	76,19	1999	39,79
1-jul-00	31-jul-00	\$ 1.026.200	30	\$ 1.965.165	\$ 16.376	2011	76,19	1999	39,79
1-ago-00	31-ago-00	\$ 1.026.200	30	\$ 1.965.165	\$ 16.376	2011	76,19	1999	39,79
1-sep-00	30-sep-00	\$ 1.026.200	30	\$ 1.965.165	\$ 16.376	2011	76,19	1999	39,79
1-oct-00	31-oct-00	\$ 1.026.200	30	\$ 1.965.165	\$ 16.376	2011	76,19	1999	39,79
1-nov-00	30-nov-00	\$ 1.026.200	30	\$ 1.965.165	\$ 16.376	2011	76,19	1999	39,79
1-dic-00	31-dic-00	\$ 1.881.367	30	\$ 3.602.803	\$ 30.023	2011	76,19	1999	39,79
1-ene-01	31-ene-01	\$ 488.711	13	\$ 860.591	\$ 3.108	2011	76,19	2000	43,27
1-feb-01	28-feb-01	\$ 1.188.750	30	\$ 2.093.317	\$ 17.444	2011	76,19	2000	43,27
1-mar-01	31-mar-01	\$ 1.127.794	30	\$ 1.985.977	\$ 16.550	2011	76,19	2000	43,27
1-abr-01	30-abr-01	\$ 1.127.794	30	\$ 1.985.977	\$ 16.550	2011	76,19	2000	43,27
1-may-01	31-may-01	\$ 1.127.794	30	\$ 1.985.977	\$ 16.550	2011	76,19	2000	43,27
1-jun-01	30-jun-01	\$ 1.691.691	30	\$ 2.978.966	\$ 24.825	2011	76,19	2000	43,27
1-jul-01	31-jul-01	\$ 1.127.794	30	\$ 1.985.977	\$ 16.550	2011	76,19	2000	43,27
1-ago-01	31-ago-01	\$ 1.127.794	30	\$ 1.985.977	\$ 16.550	2011	76,19	2000	43,27
1-sep-01	30-sep-01	\$ 1.127.794	30	\$ 1.985.977	\$ 16.550	2011	76,19	2000	43,27
1-oct-01	31-oct-01	\$ 1.127.794	30	\$ 1.985.977	\$ 16.550	2011	76,19	2000	43,27
1-nov-01	30-nov-01	\$ 1.572.013	30	\$ 2.768.220	\$ 23.069	2011	76,19	2000	43,27
1-dic-01	31-dic-01	\$ 1.728.111	30	\$ 3.043.100	\$ 25.359	2011	76,19	2000	43,27
1-ene-02	31-ene-02	\$ 1.200.000	30	\$ 1.963.029	\$ 16.359	2011	76,19	2001	46,58
1-feb-02	28-feb-02	\$ 1.200.000	30	\$ 1.963.029	\$ 16.359	2011	76,19	2001	46,58
1-mar-02	31-mar-02	\$ 1.200.000	30	\$ 1.963.029	\$ 16.359	2011	76,19	2001	46,58
1-abr-02	30-abr-02	\$ 1.200.000	30	\$ 1.963.029	\$ 16.359	2011	76,19	2001	46,58

1-may-02	31-may-02	\$ 1.200.000	30	\$ 1.963.029	\$ 16.359	2011	76,19	2001	46,58
1-jun-02	30-jun-02	\$ 1.800.000	30	\$ 2.944.544	\$ 24.538	2011	76,19	2001	46,58
1-jul-02	31-jul-02	\$ 1.200.000	30	\$ 1.963.029	\$ 16.359	2011	76,19	2001	46,58
1-ago-02	31-ago-02	\$ 1.200.000	30	\$ 1.963.029	\$ 16.359	2011	76,19	2001	46,58
1-sep-02	30-sep-02	\$ 1.200.000	30	\$ 1.963.029	\$ 16.359	2011	76,19	2001	46,58
1-oct-02	31-oct-02	\$ 1.200.000	30	\$ 1.963.029	\$ 16.359	2011	76,19	2001	46,58
1-nov-02	30-nov-02	\$ 1.200.000	30	\$ 1.963.029	\$ 16.359	2011	76,19	2001	46,58
1-dic-02	31-dic-02	\$ 2.200.000	30	\$ 3.598.887	\$ 29.991	2011	76,19	2001	46,58
1-ene-03	31-ene-03	\$ 1.200.000	30	\$ 1.834.732	\$ 15.289	2011	76,19	2002	49,83
1-feb-03	28-feb-03	\$ 1.488.000	30	\$ 2.275.067	\$ 18.959	2011	76,19	2002	49,83
1-mar-03	31-mar-03	\$ 1.344.000	30	\$ 2.054.900	\$ 17.124	2011	76,19	2002	49,83
1-abr-03	30-abr-03	\$ 1.344.000	30	\$ 2.054.900	\$ 17.124	2011	76,19	2002	49,83
1-may-03	31-may-03	\$ 1.344.000	30	\$ 2.054.900	\$ 17.124	2011	76,19	2002	49,83
1-jun-03	30-jun-03	\$ 1.344.000	30	\$ 2.054.900	\$ 17.124	2011	76,19	2002	49,83
1-jul-03	31-jul-03	\$ 1.344.000	30	\$ 2.054.900	\$ 17.124	2011	76,19	2002	49,83
1-ago-03	31-ago-03	\$ 1.344.000	30	\$ 2.054.900	\$ 17.124	2011	76,19	2002	49,83
1-sep-03	30-sep-03	\$ 2.777.037	30	\$ 4.245.932	\$ 35.383	2011	76,19	2002	49,83
1-oct-03	31-oct-03	\$ 1.631.000	30	\$ 2.493.706	\$ 20.781	2011	76,19	2002	49,83
1-nov-03	30-nov-03	\$ 1.631.000	30	\$ 2.493.706	\$ 20.781	2011	76,19	2002	49,83
1-dic-03	31-dic-03	\$ 1.851.852	21	\$ 2.831.376	\$ 16.516	2011	76,19	2002	49,83
1-ene-04	31-ene-04	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2003	53,07
1-feb-04	29-feb-04	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2003	53,07
1-mar-04	31-mar-04	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2003	53,07
1-abr-04	30-abr-04	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2003	53,07
1-may-04	31-may-04	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2003	53,07
1-jun-04	30-jun-04	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2003	53,07
1-jul-04	31-jul-04	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2003	53,07
1-ago-04	31-ago-04	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2003	53,07
1-sep-04	30-sep-04	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2003	53,07
1-oct-04	31-oct-04	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2003	53,07
1-nov-04	30-nov-04	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2003	53,07
1-dic-04	31-dic-04	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2003	53,07
1-ene-05	31-ene-05	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2004	55,98
1-feb-05	28-feb-05	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2004	55,98
1-mar-05	31-mar-05	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2004	55,98
1-abr-05	30-abr-05	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2004	55,98
1-may-05	31-may-05	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2004	55,98
1-jun-05	30-jun-05	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2004	55,98
1-jul-05	31-jul-05	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2004	55,98

1-ago-05	31-ago-05	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2004	55,98
1-sep-05	30-sep-05	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2004	55,98
1-oct-05	31-oct-05	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2004	55,98
1-nov-05	30-nov-05	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2004	55,98
1-dic-05	31-dic-05	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2004	55,98
1-ene-06	31-ene-06	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2005	58,70
1-feb-06	28-feb-06	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2005	58,70
1-mar-06	31-mar-06	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2005	58,70
1-abr-06	30-abr-06	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2005	58,70
1-may-06	31-may-06	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2005	58,70
1-jun-06	30-jun-06	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2005	58,70
1-jul-06	31-jul-06	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2005	58,70
1-ago-06	31-ago-06	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2005	58,70
1-sep-06	30-sep-06	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2005	58,70
1-oct-06	31-oct-06	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2005	58,70
1-nov-06	30-nov-06	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2005	58,70
1-dic-06	31-dic-06	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2005	58,70
1-ene-07	31-ene-07	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2006	61,33
1-feb-07	28-feb-07	\$ 0		\$ 0	\$ 0	2011	76,19	2006	61,33
1-mar-07	31-mar-07	\$ 1.669.000	30	\$ 2.073.388	\$ 17.278	2011	76,19	2006	61,33
1-abr-07	30-abr-07	\$ 1.669.000	30	\$ 2.073.388	\$ 17.278	2011	76,19	2006	61,33
1-may-07	31-may-07	\$ 1.669.000	30	\$ 2.073.388	\$ 17.278	2011	76,19	2006	61,33
1-jun-07	30-jun-07	\$ 1.669.000	30	\$ 2.073.388	\$ 17.278	2011	76,19	2006	61,33
1-jul-07	31-jul-07	\$ 1.669.000	30	\$ 2.073.388	\$ 17.278	2011	76,19	2006	61,33
1-ago-07	31-ago-07	\$ 1.669.000	30	\$ 2.073.388	\$ 17.278	2011	76,19	2006	61,33
1-sep-07	30-sep-07	\$ 1.669.000	30	\$ 2.073.388	\$ 17.278	2011	76,19	2006	61,33
1-oct-07	31-oct-07	\$ 1.669.000	30	\$ 2.073.388	\$ 17.278	2011	76,19	2006	61,33
1-nov-07	30-nov-07	\$ 1.669.000	30	\$ 2.073.388	\$ 17.278	2011	76,19	2006	61,33
1-dic-07	31-dic-07	\$ 1.669.000	30	\$ 2.073.388	\$ 17.278	2011	76,19	2006	61,33
1-ene-08	31-ene-08	\$ 1.770.000	30	\$ 2.080.401	\$ 17.337	2011	76,19	2007	64,82
1-feb-08	29-feb-08	\$ 1.770.000	30	\$ 2.080.401	\$ 17.337	2011	76,19	2007	64,82
1-mar-08	31-mar-08	\$ 1.770.000	30	\$ 2.080.401	\$ 17.337	2011	76,19	2007	64,82
1-abr-08	30-abr-08	\$ 1.770.000	30	\$ 2.080.401	\$ 17.337	2011	76,19	2007	64,82
1-may-08	31-may-08	\$ 1.770.000	30	\$ 2.080.401	\$ 17.337	2011	76,19	2007	64,82
1-jun-08	30-jun-08	\$ 1.770.000	30	\$ 2.080.401	\$ 17.337	2011	76,19	2007	64,82
1-jul-08	31-jul-08	\$ 1.770.000	30	\$ 2.080.401	\$ 17.337	2011	76,19	2007	64,82
1-ago-08	31-ago-08	\$ 1.770.000	30	\$ 2.080.401	\$ 17.337	2011	76,19	2007	64,82
1-sep-08	30-sep-08	\$ 1.770.000	30	\$ 2.080.401	\$ 17.337	2011	76,19	2007	64,82
1-oct-08	31-oct-08	\$ 1.770.000	30	\$ 2.080.401	\$ 17.337	2011	76,19	2007	64,82

1-nov-08	30-nov-08	\$ 1.770.000	30	\$ 2.080.401	\$ 17.337	2011	76,19	2007	64,82
1-dic-08	31-dic-08	\$ 1.770.000	30	\$ 2.080.401	\$ 17.337	2011	76,19	2007	64,82
1-ene-09	31-ene-09	\$ 1.911.000	30	\$ 2.086.030	\$ 17.384	2011	76,19	2008	69,80
1-feb-09	28-feb-09	\$ 1.911.000	30	\$ 2.086.030	\$ 17.384	2011	76,19	2008	69,80
1-mar-09	31-mar-09	\$ 1.911.000	30	\$ 2.086.030	\$ 17.384	2011	76,19	2008	69,80
1-abr-09	30-abr-09	\$ 1.911.000	30	\$ 2.086.030	\$ 17.384	2011	76,19	2008	69,80
1-may-09	31-may-09	\$ 1.911.000	30	\$ 2.086.030	\$ 17.384	2011	76,19	2008	69,80
1-jun-09	30-jun-09	\$ 1.911.000	30	\$ 2.086.030	\$ 17.384	2011	76,19	2008	69,80
1-jul-09	31-jul-09	\$ 1.911.000	30	\$ 2.086.030	\$ 17.384	2011	76,19	2008	69,80
1-ago-09	31-ago-09	\$ 1.911.000	30	\$ 2.086.030	\$ 17.384	2011	76,19	2008	69,80
1-sep-09	30-sep-09	\$ 1.911.000	30	\$ 2.086.030	\$ 17.384	2011	76,19	2008	69,80
1-oct-09	31-oct-09	\$ 1.911.000	30	\$ 2.086.030	\$ 17.384	2011	76,19	2008	69,80
1-nov-09	30-nov-09	\$ 1.911.000	30	\$ 2.086.030	\$ 17.384	2011	76,19	2008	69,80
1-dic-09	31-dic-09	\$ 1.911.000	30	\$ 2.086.030	\$ 17.384	2011	76,19	2008	69,80
1-ene-10	31-ene-10	\$ 1.949.000	30	\$ 2.085.758	\$ 17.381	2011	76,19	2009	71,20
1-feb-10	28-feb-10	\$ 1.949.000	30	\$ 2.085.758	\$ 17.381	2011	76,19	2009	71,20
1-mar-10	31-mar-10	\$ 1.949.000	30	\$ 2.085.758	\$ 17.381	2011	76,19	2009	71,20
1-abr-10	30-abr-10	\$ 1.949.000	30	\$ 2.085.758	\$ 17.381	2011	76,19	2009	71,20
1-may-10	31-may-10	\$ 1.949.000	30	\$ 2.085.758	\$ 17.381	2011	76,19	2009	71,20
1-jun-10	30-jun-10	\$ 1.949.000	30	\$ 2.085.758	\$ 17.381	2011	76,19	2009	71,20
1-jul-10	31-jul-10	\$ 1.949.000	30	\$ 2.085.758	\$ 17.381	2011	76,19	2009	71,20
1-ago-10	31-ago-10	\$ 1.949.000	30	\$ 2.085.758	\$ 17.381	2011	76,19	2009	71,20
1-sep-10	30-sep-10	\$ 1.949.000	30	\$ 2.085.758	\$ 17.381	2011	76,19	2009	71,20
1-oct-10	31-oct-10	\$ 1.949.000	30	\$ 2.085.758	\$ 17.381	2011	76,19	2009	71,20
1-nov-10	30-nov-10	\$ 1.949.000	30	\$ 2.085.758	\$ 17.381	2011	76,19	2009	71,20
1-dic-10	31-dic-10	\$ 1.949.000	30	\$ 2.085.758	\$ 17.381	2011	76,19	2009	71,20
1-ene-11	31-ene-11	\$ 1.863.000	30	\$ 1.932.441	\$ 16.104	2011	76,19	2010	73,45
1-feb-11	28-feb-11	\$ 2.027.000	30	\$ 2.102.554	\$ 17.521	2011	76,19	2010	73,45
1-mar-11	31-mar-11	\$ 2.027.000	30	\$ 2.102.554	\$ 17.521	2011	76,19	2010	73,45
1-abr-11	30-abr-11	\$ 2.027.000	30	\$ 2.102.554	\$ 17.521	2011	76,19	2010	73,45
1-may-11	31-may-11	\$ 2.027.000	30	\$ 2.102.554	\$ 17.521	2011	76,19	2010	73,45
1-jun-11	30-jun-11	\$ 2.027.000	30	\$ 2.102.554	\$ 17.521	2011	76,19	2010	73,45
1-jul-11	31-jul-11	\$ 2.027.000	30	\$ 2.102.554	\$ 17.521	2011	76,19	2010	73,45
1-ago-11	31-ago-11	\$ 2.027.000	30	\$ 2.102.554	\$ 17.521	2011	76,19	2010	73,45
1-sep-11	30-sep-11	\$ 2.027.000	30	\$ 2.102.554	\$ 17.521	2011	76,19	2010	73,45
1-oct-11	31-oct-11	\$ 2.027.000	30	\$ 2.102.554	\$ 17.521	2011	76,19	2010	73,45
1-nov-11	30-nov-11	\$ 2.500.000	30	\$ 2.593.185	\$ 21.610	2011	76,19	2010	73,45
1-dic-11	31-dic-11	\$ 2.500.000	30	\$ 2.593.185	\$ 21.610	2011	76,19	2010	73,45
1-ene-12	31-ene-12	\$ 2.500.000	30	\$ 2.500.000	\$ 20.833	2011	76,19	2011	76,19

1-feb-12	29-feb-12	\$ 2.500.000	30	\$ 2.500.000	\$ 20.833	2011	76,19	2011	76,19
1-mar-12	31-mar-12	\$ 2.719.000	30	\$ 2.719.000	\$ 22.658	2011	76,19	2011	76,19
1-abr-12	30-abr-12	\$ 2.586.000	30	\$ 2.586.000	\$ 21.550	2011	76,19	2011	76,19
1-may-12	31-may-12	\$ 2.592.000	30	\$ 2.592.000	\$ 21.600	2011	76,19	2011	76,19
1-jun-12	30-jun-12	\$ 2.592.000	30	\$ 2.592.000	\$ 21.600	2011	76,19	2011	76,19
1-jul-12	31-jul-12	\$ 2.592.000	30	\$ 2.592.000	\$ 21.600	2011	76,19	2011	76,19
1-ago-12	31-ago-12	\$ 2.592.000	30	\$ 2.592.000	\$ 21.600	2011	76,19	2011	76,19
1-sep-12	30-sep-12	\$ 2.592.000	30	\$ 2.592.000	\$ 21.600	2011	76,19	2011	76,19
1-oct-12	31-oct-12	\$ 2.592.000	30	\$ 2.592.000	\$ 21.600	2011	76,19	2011	76,19
1-nov-12	30-nov-12	\$ 2.592.000	30	\$ 2.592.000	\$ 21.600	2011	76,19	2011	76,19
1-dic-12	21-dic-12	\$ 1.988.000	21	\$ 1.988.000	\$ 11.597	2011	76,19	2011	76,19

TOTAL	
DIAS	3600
TOTAL SEMANAS	514,29

Ingreso Base de Liquidacion -IBL-	\$ 2.208.785,41
Semanas Cotizadas	514,29
Tasa de reemplazo	84%
Valor pensión	\$ 1.855.380